



Al contestar cite el No. 2021-01-199505

Tipo: Salida Fecha: 22/04/2021 02:58:23 PM  
Trámite: 17500 - ESTUDIO, ADMISION, INADMISION O RECHAZO  
Sociedad: 900009767 - SALINAS MARITIMAS D Exp. 53590  
Remitente: 400 - DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INS  
Destino: 415 - GRUPO DE APOYO JUDICIAL  
Folios: 8 Anexos: NO  
Tipo Documental: AUTO Consecutivo: 400-004523

## **AUTO** **Superintendencia de Sociedades**

### **Sujeto**

Salinas Marítimas de Manaure Ltda. en Reestructuración

### **Proceso**

Liquidación Judicial

### **Asunto**

Estudio solicitud de admisión a un proceso de Liquidación Judicial

### **Expediente**

53590

### **I. Antecedentes**

1. Mediante oficio 2013-01-434741 de 6 de noviembre de 2013, se aceptó la promoción de un acuerdo de reestructuración de Salinas Marítimas de Manaure Ltda. (SAMA) en los términos de la Ley 550 de 1999 y se designó como promotor al doctor Luis Fernando Alvarado Ortiz.
2. Mediante acta 1 de 1 de diciembre de 2014 se aprobó la inscripción del acuerdo de reestructuración de SAMA.
3. Lira Seguridad Ltda., inició proceso verbal sumario en contra de SAMA, como consta en el expediente 2016-480-00066, el cual culminó mediante sentencia 2019-01-096799 de 2 de abril de 2019 en la que se resolvió, entre otras, lo siguiente:

***“Segundo.** Advertir que, de conformidad con el artículo 35.5 de la Ley 550 de 1999, el acuerdo de reestructuración de Salinas Marítimas de Manaure Ltda. – SAMA Ltda. terminará en el evento en que las obligaciones objeto de las facturas 4333, 4389, 4567, 4450, 4503 y 4633 no se paguen dentro de los tres meses siguientes a que quede en firme la presente providencia o la demandante no acepte la fórmula de pago ofrecida por el deudor en el marco de la reunión de que trata el parágrafo primero del artículo 35 de la Ley 550 de 1999.”*

4. Dada la inminencia de la terminación del acuerdo de reestructuración, mediante Oficio 300-187080, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control (hoy Delegatura de Supervisión Societaria) de la Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento de la Dirección de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de la República que en el evento de una eventual terminación del acuerdo de reestructuración, no le está atribuido a esta Superintendencia el deber de constatar el incumplimiento del acuerdo de reestructuración.



5. Lo anterior, toda vez que en los términos de los artículos 35 y 36 de la Ley 550 de 1999, el promotor es el que, en el supuesto de incumplimiento, *“dará traslado a la autoridad competente para que se inicie de oficio el proceso concursal de liquidación obligatoria o el procedimiento especial de intervención o liquidación que corresponda”*.
6. Mediante Oficio 2019-01-293663 de 1 de agosto de 2019, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, indicó a la Consejería para la Gestión Público Privada de la Presidencia de la República, que SAMA está excluida del régimen de insolvencia de la Ley 1116 de 2006, de acuerdo con el artículo 3 de la mencionada ley, por tratarse de una entidad descentralizada.
7. Mediante Oficio 2020-01-087358 de 27 de febrero de 2020, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 550 de 1999, lo procedente es que el promotor inscriba en el registro mercantil la terminación del acuerdo y le solicite a la Presidencia de la República la liquidación de SAMA.
8. Además, sostuvo que la liquidación de SAMA conlleva la expedición de un Decreto que fije las reglas de la misma y que fije las reglas y la autoridad competente para adelantarla que, por disposición del artículo 3 de la Ley 1116 de 2006, no podría ser la Superintendencia de Sociedades.
9. Mediante Oficio 20205000036841-DDJ del 25 de julio de 2020, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado sostuvo que la Superintendencia de Sociedades, como juez competente del concurso de acreedores, debería determinar si SAMA incurrió en cesación de pagos e incumplimiento del acuerdo de reestructuración, para que promuevan o adopten las decisiones que correspondan.
10. Adicionalmente, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado sostuvo que, en la actualidad, *“la Nación no es accionista de dicha empresa y por lo tanto las acciones que cualquier entidad del orden nacional adopte, debe tener en cuenta dicha circunstancia”*.
11. Así mismo, sostuvo que existen factores suficientes para analizar las alternativas que permitan a la comunidad Wayúu continuar con la actividad económica de la empresa desarrollada, para lo cual mencionó que SAMA fue creada por el Gobierno para garantizar a la comunidad indígena mencionada sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, al suministro de agua potable y a su desarrollo social y cultural y que les permitiría a sus miembros disfrutar de una especial calidad de vida acorde con el medio en el cual habitan.
12. Mediante oficio 2020-01-413016 de 11 de agosto de 2020, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control remitió comunicación a la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada de la Presidencia de la República, en la que sostuvo que el régimen de liquidación judicial previsto en la Ley 1116 de 2006 podría ser aplicable y que sería la Delegatura de Insolvencia de esta Superintendencia, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, la llamada a pronunciarse al respecto, en el evento en que se presente la solicitud.
13. El promotor del acuerdo de reestructuración convocó a reunión de acreedores en los términos del artículo 23 de la Ley 550 de 1999, a fin de verificar la existencia de la causal de terminación del acuerdo en los términos del artículo 35.5 de la Ley 550 de 1999, consistente en el incumplimiento de obligaciones post por más de 90 días.
14. El 28 de enero y el 4 de febrero de 2021, se llevó a cabo la reunión para la normalización de las obligaciones post reestructuración de SAMA; sin embargo, no se llegó a un acuerdo, configurándose la causal 5 del artículo 35 de la Ley 550 de 1999, para la terminación del acuerdo de reestructuración. Así, en el acta en la



que consta el desarrollo de la mencionada reunión, se sostuvo que “no queda duda que la causal legal existe para dar por terminado el trámite”.

15. Mediante oficio 2021-01-150297 del 16 de abril de 2021, la Dirección de Supervisión Empresarial puso en conocimiento de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia la comunicación 2021-01-064632 de 4 de marzo de 2021 presentada por el promotor del acuerdo de reestructuración de SAMA, en la cual se presentaron los resultados de las reuniones con SAMA para subsanar los incumplimientos del acuerdo de reestructuración.

## II. Consideraciones del Despacho

Expuestos los antecedentes que dieron lugar al presente trámite, este Despacho advierte la falta de jurisdicción de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades para decretar la Liquidación Judicial de SAMA, como se expondrá a continuación:

### A. Naturaleza jurídica de SAMA

La población indígena Wayúu se encuentra asentada en la Península de la Guajira y se ha dedicado al pastoreo, la horticultura y la explotación artesanal de la sal. A fin de proteger esta última actividad, el Gobierno otorgó apoyo a la comunidad indígena, para lo cual creó la Concesión Salinas mediante la Ley 41 de 1968.<sup>1</sup>

El 27 de julio de 1991, se suscribió un acuerdo entre los representantes del Gobierno, el Instituto de Fomento Industrial – IFI -, Concesión Salinas y la Comunidad Indígena Wayúu del Municipio de Manaure, Guajira, para la constitución de una sociedad de economía mixta con la participación de dicha comunidad indígena.<sup>2</sup>

Dentro del acuerdo de 27 de julio de 1991 se convino, entre otras, el suministro de agua para consumo en el área ocupada por dicha comunidad y la posibilidad de mantener el sistema de recolección manual de la sal utilizado por el Banco de la República desde 1963.<sup>3</sup>

Aunque el Gobierno expidió los Decretos Ley 1376 de 1994 y 1323 de 1995, los mismos no daban lugar a la creación de una sociedad de economía mixta, pues para ello era necesaria la expedición de una ley.<sup>4</sup>

Dado que dicho acuerdo se incumplió, esta circunstancia llevó a la comunidad indígena a presentar acciones de tutela en contra del Gobierno para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Mediante sentencia T-007 de 1995, la Corte Constitucional sostuvo que la creación de la sociedad de economía mixta acordada desde 1991 tenía por finalidad proteger intereses y derechos fundamentales de los indígenas, así:

**“(…) la comunidad Wayúu ha tenido una estrecha y centenaria vinculación con la actividad de la explotación de sal en Manaure, tanto que si bien no es posible reducir a dicha actividad toda la fuente de sus ingresos, se considera de todas maneras como la contribución más importante y significativa en que se apoya su supervivencia socioeconómica (…)**

*La Constitución Política incorporó dentro de sus preocupaciones, el reconocimiento y defensa de las minorías étnicas, y de manera muy significativa, reservó en favor de las comunidades indígenas una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia de su integridad cultural, social y económica, su capacidad de autodeterminación administrativa y judicial, la consagración de sus resguardos como propiedad colectiva de carácter inalienable, y, de los territorios indígenas como entidades territoriales al*

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-007 de 1995.

<sup>2</sup> Ibídem.

<sup>3</sup> Ibídem.

<sup>4</sup> Exposición de motivos de la Ley 773 de 2002.



lado de los municipios, los distritos y los propios departamentos (C.P. arts. 7, 171, 246, 286, 329, 330, etc.).

(...)

“Hay que considerar adicionalmente, que el Estado a través de las entidades públicas intervinientes en la celebración del Acuerdo se comprometió a la realización de una serie de acciones tendientes a garantizar de manera concreta el derecho al trabajo de la comunidad Wayúu con la organización y funcionamiento de una empresa que se encargara de la explotación de la sal y, además, a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo social y cultural de dicha comunidad. Por lo tanto, a juicio de la Sala, el compromiso asumido tiende a hacer efectivos derechos que se estiman fundamentales, no meramente programáticos, sino ciertos y reales, que se consideran medulares para la supervivencia y el desarrollo socio-cultural de la etnia Wayúu como grupo social que merece la especial protección del Estado en los términos de los artículos 1, 7 y 8 de la C.P. A esta solución llegó esta misma Sala en la sentencia No. T-342 de fecha julio 27 de 1994 cuando ordenó proteger la diversidad étnica y cultural de la Tribu Nukak-Maku.

“La efectividad de los aludidos derechos (art. 2 C.P.) contribuye además a hacer realidad el principio de igualdad (art. 13 C.P.) y la justicia material, porque en este caso el Estado en dicho Acuerdo se obligó a promover, con acciones concretas, las condiciones para lograr la igualdad material de una comunidad discriminada y marginada.

“...

“El incumplimiento de este tipo de obligaciones, resta credibilidad y legitimidad a la acción del Estado, frustra las aspiraciones legítimas de la comunidad, alienta las soluciones violentas a sus reclamaciones y, además, es contrario a la filosofía que emana del preámbulo de la Carta y al principio de la buena fe (art. 83 C.P.). El Estado Social de Derecho no sólo demanda de éste la proyección de estrategias para dar soluciones a las necesidades básicas de la comunidad en lo social y en lo económico, sino que exige acciones concretas para satisfacerlas; por lo tanto, la oferta o el compromiso estatal para atender en concreto dichas necesidades requiere ser traducido a la realidad, más aún cuando se trata de proteger o amparar derechos fundamentales.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Lo anterior, evidencia tal como lo sostuvo la Corte Constitucional, que “desde tiempos inmemorables la comunidad Wayúu está vinculada a las labores de explotación de las Minas de Sal de Manaure”.<sup>5</sup>

Como consecuencia de lo anterior, se profirió la Ley 773 de 2002, que fue objeto de control de constitucionalidad mediante sentencia C-620 de 2003. Con la Ley 773 se autorizó la creación de una sociedad de economía mixta, en calidad de concesionaria, vinculada al Ministerio de Desarrollo (hoy Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), cuyo objeto principal sería la administración, fabricación, explotación, transformación y comercialización de las sales que se producen en las salinas marítimas de Manaure, Guajira.

Mediante Escritura Pública 135 de 21 de diciembre de 2004, se constituyó SAMA como una sociedad limitada y el Gobierno Nacional cedió sus aportes a las comunidades indígenas al momento de Constitución. Según consta en la mencionada escritura, las asociaciones beneficiarias de los aportes cedidos por el Gobierno agrupan propietarios de tierras, cosechadores indígenas y a los explotadores de las charcas paralelas, miembros de las comunidades indígenas y tribales asentadas en la zona de explotación salinífera de Manaure, logrando la protección de los miembros de la comunidad.

La composición societaria de SAMA es la siguiente: Municipio de Manaure (24%, entidad pública); Suman Ichi (36%, corresponde a la “*asociación de autoridades tradicionales indígenas Wayuu del área de influencia de las Salinas de Manaure*”, tiene personería jurídica de derecho público especial concedida por la dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, según resolución 001 de 9 de enero de 1996)<sup>6</sup>; Waya Wayúu (30%, son miembros de la comunidad Wayúu y quienes explotan directamente las

<sup>5</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2003

<sup>6</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2003 y Ley 773 de 2002, artículo 2.





charcas indígenas de producción de sal en Manaure)<sup>7</sup>; Asocharma (10%, es la Asociación de los Charqueros Paralelos Manaure), estas dos últimas, pertenecen a la comunidad Wayúu que explotan las charcas salineras indígenas denominadas “Shorshimana” y “Manaure”, y algunas charcas salineras familiares.<sup>8</sup>

Dado el carácter de sociedad de economía mixta, según el artículo 1 de la Ley 773 de 2002, este Despacho encuentra que SAMA hace parte de la rama ejecutiva del poder público como **entidad descentralizada del orden nacional**.

En efecto, el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, establece que las sociedades de economía mixta hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, en el orden nacional:

*“La Rama Ejecutiva del Poder Público en el **orden nacional**, está integrada por los siguientes organismos y entidades: (...) f. Las sociedades públicas y las **sociedades de economía mixta**”* (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Además, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, establece que **las sociedades de economía mixta son entidades descentralizadas**, en este caso, del orden nacional, y se sujetan a las reglas señaladas en dicha ley:

*“**Son entidades descentralizadas del orden nacional**, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y **las sociedades de economía mixta**, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.*

*Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la presente ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. (...)”* (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Así, contrario a lo indicado por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado en Oficio 20205000036841-DDJ del 25 de julio de 2020 en cuanto a que “la Nación no es accionista de dicha empresa y por lo tanto las acciones que cualquier entidad del orden nacional adopte, debe tener en cuenta dicha circunstancia”, **la Ley 773 de 2002 le dio a SAMA el carácter de vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo así como de economía mixta** y, por lo tanto, su carácter es de **entidad descentralizada del orden nacional**.

## **B. Exclusión del régimen de insolvencia contenido en la Ley 1116 de 2006**

Ley 1116 de 2006 es aplicable a los siguientes sujetos:

*“ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. (...)”*

Si bien el artículo 2 de la Ley 1116 establece que es aplicable a las sociedades de carácter mixto, el artículo 3 de la Ley 1116 de 2006 establece que **se excluyen de dicho régimen las entidades descentralizadas**:

*“No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley:  
(...)”*

<sup>7</sup> Corte Constitucional, ibídem.

<sup>8</sup> Escritura Pública 135 de 21 de diciembre de 2004.



6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.<sup>9</sup>  
(Negrilla y subrayado fuera del texto original)

El régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006 no le es aplicable a SAMA por cuanto es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que la hace una entidad descentralizada del orden nacional, que está expresamente excluida del régimen de insolvencia empresarial.

El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 establece que las sociedades de economía mixta son entidades descentralizadas y se sujetan a las reglas señaladas en dicha ley. Para efectos de la liquidación y/o supresión de dichas entidades, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 establece que se podrá realizar por el Presidente de la República cuando las evaluaciones de la gestión administrativa, efectuadas por el Gobierno Nacional.

Como se expuso, SAMA es una sociedad de economía mixta descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objeto de creación es la protección de derechos fundamentales de las comunidades indígenas, especialmente, la comunidad indígena Wayúu asentada en el municipio de Manaure, Guajira, cuya protección se da a través del uso y el goce en la explotación minera de sal.

Lo anterior, ha sido objeto de amplio desarrollo por la Corte Constitucional, que sostuvo que el trato diferenciado a la comunidad indígena Wayúu materializa no solo su derecho fundamental a la igualdad, sino también, persigue el objetivo constitucional de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de esa comunidad, milenariamente asociada a la explotación de la sal en su territorio. Por lo tanto, sostuvo que su creación se trata de un caso especial, al que deben corresponder medidas legislativas especiales:

*“(…) efectivamente la ley dispensa un tratamiento diferente a la comunidad indígena de la zona salinífera de Manaure. No obstante, ello per se no resulta contrario al derecho de igualdad que consagra el artículo 13 superior. Reiteradamente la Corte ha considerado que no todo trato distinto es discriminatorio y que ciertas medidas diferenciales pueden resultar exequibles si persiguen una finalidad constitucional que se estime legítima, siendo además proporcionadas y razonables. En el presente caso, el trato diferente que se otorga a la comunidad Wayúu de Manaure, representada por la sociedad Sumain Ichi, persigue un claro objetivo constitucional que consiste en reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de esta comunidad, milenariamente asociada a la explotación de la sal en su territorio. Reconocimiento y protección que en este caso reviste connotaciones especiales, dados los antecedentes históricos que han enmarcado las relaciones entre el Estado y la comunidad indígena en desarrollo de la explotación salinífera, y que hacen que, para dar cumplimiento a los acuerdos logrados entre ambas partes y que constituyen una manifestación del derecho de participación en la adopción de decisiones que conciernen al pueblo Wayúu, sea necesario dar viabilidad jurídica a la constitución de la sociedad ideada conjuntamente como fórmula posible de solución a los problemas originados por la referida explotación. Se trata pues, de la única manera de dar posibilidad de cumplimiento en forma adecuada a la fórmula de concertación acordada en 1991.*

*De otro lado, debe tenerse en cuenta que ninguna otra comunidad indígena del país ha vivido un proceso histórico igual al de la comunidad Wayúu en lo referente a la explotación de un recurso natural renovable existente en su territorio, ni ha llegado a participar en la adopción de fórmulas como la convenida en el pluricitado acuerdo de 1991, por lo que puede decirse que se trata de un caso especial, al que deben corresponder medidas legislativas también especiales.”<sup>9</sup> (Negrilla y subrayado fuera del texto original)*

Lo anterior implica que la supresión y liquidación de SAMA no puede realizarse bajo las normas de la Ley 1116 de 2006 –**no solo por estar expresamente excluida**- sino además porque la finalidad de dicho régimen no garantiza la continuidad de la explotación

<sup>9</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-620 de 2003.



de minas de sal respecto de las comunidades indígenas Wayúu y, por ende, **no garantiza la protección efectiva de sus derechos fundamentales.**

En efecto, en la exposición de motivos de la Ley 1116 de 2006 se estableció que el ámbito de aplicación de dicho régimen excluía ciertos sectores dada la especial naturaleza frente a los bienes jurídicos que protege el régimen de insolvencia:

***“El ámbito de aplicación, en cuanto a las personas jurídicas, tiene un menor cubrimiento; la experiencia demostró que algunos de los sectores actualmente incluidos en la Ley 550 de 1999, como las de aseguramiento del sector salud y las de servicios públicos domiciliarios, ameritan un tratamiento diferente, dada su especial naturaleza frente a los bienes jurídicos que protege el régimen de insolvencia, por lo cual resulta pertinente excluirlas del mismo, al igual que todas aquellas personas jurídicas sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios o de liquidación.”***(Negrilla y subrayado por fuera del texto original)

Proceder de forma diferente, esto es, decretar la Liquidación Judicial de SAMA, implicaría no solo que esta Entidad ejerza funciones que no le han sido asignadas, sino también desconocer la naturaleza jurídica especial y finalidad de creación legal de SAMA, lo que podría traer graves consecuencias para la preservación de los derechos de la comunidad indígena Wayúu.

### **C. Falta de jurisdicción de la Superintendencia de Sociedades**

De conformidad con el artículo 116, inciso 3 de la Constitución Política, excepcionalmente algunas autoridades administrativas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en materias precisas determinadas por la ley. El artículo 6 de la Ley 1116 de 2006 otorga funciones jurisdiccionales a este Despacho para conocer de manera privativa del trámite de los procesos concursales, de todas las sociedades, empresas unipersonales y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.

Esta atribución de funciones jurisdiccionales es excepcional, es decir, se limita únicamente a los asuntos fijados por la ley y no a otros análogos. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la atribución de competencias jurisdiccionales a autoridades administrativas es precisa, de modo que la materia sobre la cual recae es puntual, exacta, y no pueda extenderse ni confundirse a otros asuntos.<sup>10</sup>

Si bien la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones administrativas tenía la competencia por Ley 550 de 1999 para nominar al promotor del acuerdo de reestructuración, dicha competencia no se confirió por la Ley 1116 de 2006 para decretar una eventual Liquidación Judicial de SAMA, por exclusión expresa del artículo 3 de la misma, al tratarse de una entidad descentralizada del orden nacional.

Por lo anterior, en virtud del principio de legalidad, no se pueden asimilar o extender las funciones conferidas para los trámites de reestructuración previstos en la Ley 550 de 1999 a la Superintendencia de Sociedades, con las facultades otorgadas por la Ley 1116 de 2006.

Aunque lo anterior es suficiente para abstenerse de decretar la apertura de un proceso de Liquidación Judicial de SAMA, este Despacho encuentra que, si en gracia de discusión se admitiera que la Ley 1116 de 2006 es aplicable, el proceso de Liquidación Judicial de SAMA no es de competencia de la Superintendencia de Sociedades.

En efecto, el artículo 6 de la Ley 1116 de 2006 establece la competencia de la Superintendencia de Sociedades para conocer procesos de insolvencia en los siguientes términos:

*“La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 116 de la Constitución Política,*

<sup>10</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-467 de 2019.



*en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.”*

Dado que SAMA es una sociedad de economía mixta de carácter descentralizado, según lo expuesto en los capítulos anteriores, la facultad para conocer del eventual proceso de Liquidación Judicial no estaría circunscrita a las previstas en el artículo 6 de la Ley 1116 citado.

En consecuencia, la Superintendencia de Sociedades tampoco sería el juez competente para adelantar la Liquidación Judicial de SAMA.

En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia,

### **Resuelve**

**Primero.** Abstenerse de decretar la Liquidación Judicial de Salinas Marítimas de Manaure Ltda. por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**Segundo.** Declarar la falta jurisdicción para conocer de la liquidación de Salinas Marítimas de Manaure Ltda. por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**Tercero.** Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad remitir copia de la presente providencia al promotor del acuerdo de reestructuración doctor Luis Fernando Ortiz Alvarado [lfalvarado@alvaradoabogadosasociados.com](mailto:lfalvarado@alvaradoabogadosasociados.com)

**Tercero.** Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad remitir copia de la presente providencia a la Dirección de Supervisión Empresarial de esta Entidad.

**Notifíquese y cúmplase,**

**SUSANA HIDVEGI ARANGO**

Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia

TRD: JURÍDICO